

# La economía china desde Tiananmen

Kathleen Hartford

**D**esde finales de los años setenta China comenzó a poner en práctica un itinerario de reformas económicas que rindió sus frutos a todo lo largo de la década siguiente. Sin embargo, para 1989 el impulso así generado no solo comenzó a perder intensidad, sino que, en cambio, los efectos del impacto causado por el crecimiento comenzaron a evidenciarse. En verdad, más allá de lo que tienen de testimonio de inconformidad respecto del régimen totalitario, los hechos de Tiananmen expresan desfases de hondo calado en la estructura económica, que aluden, por una parte, a la subsistencia de un orden dual, de diferencia de estatutos normativos y niveles de vida entre el campo y la ciudad; y, por la otra, a la contradicción entre la modernización de la economía y el sistema de derechos que sustenta el régimen comunista<sup>1</sup>.

\* \* \*

HOY EN DÍA LAS DISCUSIONES EN TORNO a la economía china son de estilo *Rashomon*. Los economistas norteamericanos expertos en el tema suelen describir un panorama optimista con unas ligeras fisuras y advertencias. Las opiniones de los economistas europeos y japoneses fluctúan entre el optimismo y el más profundo pesimismo. Si se le mencionan las evaluaciones optimistas a un economista chino, lo más probable es que menee tristemente la cabeza y en seguida suelte una retahíla de malas noticias y pronósticos todavía más desalentadores.

Se supone que todos están analizando la misma situación, pero no cabe duda de que están percibiendo escenarios diferentes. Se escucha decir que la reforma prácticamente se ha suspendido y, al propio tiempo, que prosigue con bastante vigor; que las perspectivas de crecimiento económico rápido son alentadoras, o que dentro de tres, cinco o diez años ocurrirá un colapso económico de envergadura. Lo único en que todo el mundo está de acuerdo es en que el panorama económico es complejo.

Gran parte de la atención prestada a la economía china desde la represión militar y política de 1989 ha girado en torno al interrogante de si China está retrocediendo en términos de reforma económica, o si sigue adelante. Con demasiada frecuencia la "reforma" y el "crecimiento económico", ambos considerados buenos *a priori*, se combinan. Sin embargo la "re-

IV TRIMESTRE 1992

forma" no es una panacea para todos los problemas económicos. Así mismo, no todos los cambios en política económica significan que se está retrocediendo o avanzando en la reforma, algunos de ellos son tan sólo una variación de la "política económica" o "política de desarrollo". Con el fin de penetrar en la complejidad del actual panorama económico de la China debemos determinar ante todo qué es la reforma y luego cómo se relaciona ésta con el crecimiento económico. El crecimiento económico de China en el curso del último decenio se ha sustentado en múltiples factores, algunos de los cuales podrían considerarse reforma genuina, otros antirreforma y otros neutros.

De otra parte, existe un interrogante más profundo en torno a la conexión entre "reformas" y "reforma" en el sentido de una transformación genuina del sistema económico. Numerosos analistas sostienen que se están acumulando reformas parciales, lo cual allana el camino hacia la transformación sistemática. Sin embargo, como sostendré, las características modificadas muchas veces han sido adheridas a una serie de instituciones y estructuras económicas heredadas del sistema estalinista-maoísta que en general no han sido reformadas; China ha sufrido un reajuste, pero no una reforma sistemática. Pese a los resultados fenomenales obtenidos en términos de desarrollo económico desde que comenzó la reforma, tres aspectos importantes de la política económica china han permanecido inalterados desde fines de los años 50 hasta la actualidad: su rígido sistema de residencia, que relega a los habitantes rurales a un estatus de segunda clase al impedirles migrar a las ciudades, imponerles cuotas obligatorias de producción de cereales y adquisición en términos desventajosos para los agricultores, y un sesgo que beneficia a las empresas estatales urbanas y sus empleados a expensas de los habitantes del sector rural.

Una reforma sistemática genuina requeriría la modernización de la economía y del sistema de derechos que sustentan la estructura estalinista-maoísta, sobre todo en lo concerniente a las divisiones de casta entre las áreas urbana y rural. Sin embargo, hasta ahora se ha evitado realizar una transformación sistemática, en parte porque los reformadores chinos se aferraron durante mucho tiempo a la esperanza melancólica de que el proceso de reajuste redundaría indirectamente en el logro de los cambios sistemáticos necesarios. En vez de ello, aunque el reajuste ha atenuado algunos de los problemas inmediatos y ha permitido algunos brotes de crecimiento, ha entrañado un costo muy alto tanto a nivel económico como político.

El colapso dramático de los antiguos Estados comunistas de Europa del Este y la Unión Soviética ha fortalecido la determinación de los dirigentes conservadores de China de no renunciar a lo que ellos consideran la esencia del socialismo. No obstante, el costo que entraña mantener el método de reajuste se ha vuelto literalmente prohibitivo y obstaculiza el crecimiento sostenido y la verdadera reforma.

CHINA FUE EL PRINCIPAL EXPERIMENTO ECONOMICO de éxito ocurrido en el mundo en los años 80. Con la ayuda de una serie de ambiciosos objetivos de desarrollo formulados a fines de los años 70 y comienzos de los 80, la nueva dirigencia, presidida por Deng Xiaoping, transformó las estancadas áreas rurales en un motor de crecimiento, abrió la nación a la asistencia, el comercio y la inversión extranjeros, creó centenares de millones de nuevos consumidores ávidos y alentó la expansión de sectores colectivos y privados prósperos no sujetos al control estatal central directo. Los expertos chinos y extranjeros todavía debaten hasta qué punto ha cambiado la economía y por qué.

No cabe duda de que ha cambiado, y en gran medida positivamente. China fue la tercera economía de más rápido crecimiento en el mundo entre 1980 y 1987, casi equiparando las tasas alcanzadas por Corea del Sur cuando su economía despegó a fines de los años 60 y comienzos de los 70. En términos reales, el Producto Nacional Bruto (PNB) de China creció en un promedio ligeramente inferior al diez por ciento anual entre 1980 y 1988 (el promedio industrial fue del doce por ciento; el crecimiento del sector agrícola fue de casi siete por ciento)<sup>1A</sup>. Entre 1978 y 1988 la producción de cereales se elevó en casi un tercio, mientras que la producción de algodón casi se dobló y la producción de carne, azúcar y semillas oleaginosas aumentó en más del ciento cincuenta por ciento.

Tanto los ingresos rurales como los urbanos prácticamente se doblaron en términos reales. El consumo de alimentos mejoró notoriamente tanto en las ciudades como en los pueblos. En 1988 el chino promedio consumía veintisiete por ciento más cereales, casi el doble de azúcar y más del doble de carne, huevos y pescado que en 1978<sup>2</sup>. El espacio de habitación urbana aumentó más del doble entre 1978 y 1989, mientras que el espacio de habitación rural se incrementó en un ochenta por ciento<sup>3</sup>. En las áreas urbanas, por cada cien hogares había 177 bicicletas, 73 lavadoras, 59 televisores en blanco y negro y 44 de color, 64 grabadoras y 38 refrigeradores eléctricos; y si bien los hogares rurales tenían comparativamente menos electrodomésticos y bienes de consumo, también sus posesiones se estaban multiplicando con celeridad<sup>4</sup>.

Como es apenas natural, no todos los cambios ocurridos en los años ochenta fueron positivos o populares. La inflación, el desempleo abierto y un brusco incremento en las tasas de criminalidad generaron gran preocupación. Estos problemas, aunque mínimos en relación con otras naciones en estadios comparables de desarrollo económico, suscitaron gran alarma,

1A / Banco Mundial, *China: Between Plan and Market*. (Washington, DC: The World Bank, 1990), p. 2.

2 / Calculado con base en el *China Statistical Yearbook 1990*, Oficina de Estadísticas del Estado (Beijing); Centro Internacional para el Avance de la Ciencia y la Tecnología LTD y Centro de Información Estadística y Servicios de Consultoría de China, 1990), p. 276).

3 / Estos se basan en cifras de un sondeo de muestra que probablemente sobreestiman el promedio nacional de mejoramiento. Véase *ibid.*, p. 272.

4 / *Ibid.*, pp. 291, 307.

pues los chinos estaban acostumbrados a asumir que la China socialista jamás tendría que sufrir males de ese estilo. Si bien algunas áreas prosperaron sustancialmente, otras se estancaron, víctimas de lo que muchos consideraban una pobreza imposible de erradicar. La eliminación de las antiguas redes de seguridad social y de los beneficios rurales de salud y bienestar dejaron a los ancianos, a los pobres y a muchos jóvenes desprotegidos y en peores condiciones que antes. Numerosos chinos de edad se quejaron de la falta de preocupación por los demás que denotaban los jóvenes; por su parte, a muchos jóvenes les molestaba la actitud hostil con que sus mayores afrontaban el cambio. No obstante, la mayoría de los chinos, ya fueran urbanos o rurales, de nivel alto o bajo, jóvenes o ancianos, parecieron apreciar los cambios económicos de la era posmaoísta.

Los laureles de estos y otros logros económicos han sido atribuidos por lo general a las reformas económicas lanzadas en la sesión plenaria del Partido Comunista Chino (PCC) celebrada en diciembre de 1978. Los observadores externos suelen sostener que semejante crecimiento sin precedentes sólo puede explicarse por la masiva reorganización de la agricultura y la industria, la reorientación hacia la economía de mercado y la introducción de muchas iniciativas ajenas al control estatal central<sup>5</sup>. En China los mejoramientos continuos en producción, ingresos y consumo ayudaron a estructurar y mantener unido el consenso de liderazgo y el apoyo popular que sustentaron el proyecto de reforma. Aunque las reformas ocasionalmente desafiaron dogmas ideológicos defendidos por los dirigentes más conservadores y debilitaron las garantías de empleo y bienestar, considerados como derechos por la mayoría de los chinos, el apoyo siguió firme hasta fines de los años 80, cuando la economía empezó a tambalearse.

Desde la perspectiva de fines de los años 70, un reformador ávido tenía mucho material sobre el cual trabajar y numerosas razones para hacerlo: un deterioro general en la tasa de crecimiento de los sectores agrícola e industrial, dependencia creciente de las importaciones de determinadas materias primas esenciales, atraso tecnológico y una población descontenta hastiada de las campañas de producción y alienada por la intromisión de la ideología en todos los aspectos de sus vidas. Por lo tanto, por razones de supervivencia económica y legitimidad política, los dirigentes del PCC, liderados por Deng Xiaoping, consideraron que tenían que emprender la reforma o morir.

Pero, ¿qué y cómo reformar? En torno a esto no hubo un acuerdo generalizado entre la dirigencia central, ni al iniciarse las reformas ni después.

5/ Gran parte del análisis de esta sección se basa en Kathleen Harrford, "The Double Dilemma of China's Economic Reform", *Socialist Review*, No. 4 (1990), pp. 95-134. Se han publicado numerosos libros y colecciones editadas sobre las reformas posmaoístas. Para un análisis general especialmente lucido, véase Harry Harding, *China's Second Revolution: Reform after Mao* (Washington, DC: Brookings Institution, 1987). Hay varias colecciones de ensayos excelentes: Christine Wong y Elizabeth J. Perry, eds., *The Political Economy of Reform in Post-Mao China* (Cambridge: Harvard University Press, 1985); Victor Nee y David Stark, eds., *Remarkings the Economic Institutions of Socialism: China and Eastern Europe* (Stanford: Stanford University Press, 1989); Richard Baum, ed., *Reform and Revolution in Post-Mao China: The Road to Tiananmen* (New York: Routledge, 1991); y Yany Suih y Maria Davoa, eds., *The Reform Decade in China: From Hope to Dismay* (London: Kegan Paul, de próxima aparición).

La primera división básica se produjo entre quienes consideraban que los excesos maoístas de la década de la Revolución Cultural (1966 a 1976) eran el principal objeto de reforma y quienes pretendían modernizar el sistema de planeación centralizada característico de las economías de estilo soviético<sup>6</sup>. Quienes deseaban un programa de reforma de mayor alcance se concentraron en tres aspectos un tanto interdependientes de la economía china: el sistema de producción manejado colectivamente o por el Estado y la propiedad pública de los medios de producción; el sistema de "coordinación" de la economía a través de un plan nacional de cumplimiento obligatorio que fijaba precios, asignaba insumos y canalizaba los productos a través de monopolios comerciales estatales, y un sistema financiero estatal que recaudaba gran parte de sus ingresos a través de las utilidades de las empresas y no mediante impuestos y que utilizaba el control de precios para trasladar recursos entre los diversos sectores de la economía.

Si bien todos estos factores caracterizaron la economía china desde fines de los años 50 hasta fines de los 70, la estrategia de desarrollo maoísta después de mediados de los 60 incorporó aspectos que hicieron de la China una versión distinta de la economía socialista. En primer lugar, debido al énfasis colocado en la autosuficiencia durante los últimos años del reinado de Mao Zedong, las medidas impuestas en los años 50 para frenar la migración rural-urbana fueron perpetuadas. El registro oficial (*hukou*) de cada chino definía sus derechos de residencia, su acceso al empleo y su acceso al suministro de alimentos en un lugar especial. Después de fines de los 50 resultaba extremadamente difícil y raro que un residente obtuviera un cambio oficial de registro que le otorgara estatus urbano<sup>7</sup>.

Sin este tipo de control de la población las ciudades se hubieran visto inundadas de migrantes rurales en busca de los empleos mejor pagados del sector estatal, un suministro de alimentos confiable a bajo precio, mejores viviendas, beneficios médicos, oportunidades educativas y diversiones culturales que sólo existían en la China urbana. La estrategia de autosuficiencia de Mao obligó a las comunidades rurales a autosostenerse utilizando sus propios recursos. Al mismo tiempo, empero, los recursos que tenían a su disposición estaban siendo drenados mediante ventas obligatorias de los productos al Estado a precios fijos bajos. Las políticas que protegían las industrias urbanas estatales de la competencia limitaban las perspectivas de los campesinos de desarrollar fuentes no agrícolas de ingresos. La combinación de estas medidas creaba y perpetuaba un dualismo pronunciado en la

6/ Véase David Zweig, *Agrarian Radicalism in China, 1966-1981* (Cambridge: Harvard University Press, 1989).

7/ Era relativamente fácil trasladarse de la ciudad al campo, pero pocas personas lo hacían voluntariamente. Millones de jóvenes enviados al campo entre 1968 y 1975 fueron involuntariamente transferidos a registro rural y, por lo tanto, perdieron el derecho de vivir en sus ciudades de origen.

economía china, que era producto del desarrollo socialista en vez de aquello que el desarrollo intentaba eliminar<sup>8</sup>.

Las políticas maoístas de autosuficiencia también institucionalizaron un sistema de autarquía local, regional e inclusive nacional como pilar de la máquina de desarrollo. A mediados de los años 70 este énfasis había producido lo que algunos han dado en llamar una "economía celular". Bajo el sistema maoísta el plan nacional sólo estaba dirigido a los sectores más cruciales de la economía, por ejemplo las industrias esenciales relacionadas con defensa, los alimentos urbanos, las materias primas claves y los insumos de industria ligera como algodón y tabaco. Este enfoque impidió conscientemente una especialización regional; se esperaba que las provincias fueran lo más autosuficiente posible en la producción de sus propios alimentos, insumos agrícolas y gran parte de sus necesidades industriales, independientemente de las ventajas comparativas y los costos de oportunidad. En otras palabras, mientras que la justificación para la economía planeada de estilo soviético era conseguir una racionalidad de resultados mayor que la que podría ofrecer el mercado, la estrategia maoísta le confirió más importancia a la autosuficiencia que a los resultados económicos agregados.

Finalmente, como uno podría sospechar de acuerdo con todo lo anterior, el enfoque maoísta le concedía mayor importancia a las consideraciones políticas que a las económicas en todos los aspectos de la vida económica. Pero también se trataba de una política bastante particular, una política contraria a los métodos e instituciones burocráticos o tecnocráticos, inspirada en movilizaciones masivas con el ánimo de aprovechar la energía popular para atacar al "enemigo de clase" del momento o aumentar la producción, y convencida de que el autosacrificio era beneficioso. Los años de las campañas de movilización, que una y otra vez hacían caso omiso de la política oficial y los métodos administrativos regulares, imposibilitaron una planeación real<sup>9</sup>. Los funcionarios de todos los niveles descubrieron que resultaba potencialmente peligroso utilizar criterios económicos para realizar sus funciones económicas, o recurrir a incentivos económicos para mejorar el desempeño. El alto valor concedido a la igualdad en las unidades de trabajo rurales y urbanas generó una mentalidad de igualdad, denunciada en la era posmaoísta como "estar comiendo todos de una misma olla".

Lo que más molestó a la mayoría de los chinos en la era posterior a Mao fueron los excesos maoístas. Para los miembros más tradicionalistas e imitadores del sistema soviético de la dirigencia del PCC, personas como Chen Yun y Yao Yilin, el experimento maoísta fue el responsable de los problemas experimentados por la economía socialista, la cual sólo tenía que retornar a la modalidad de planeación burocrática-tecnocrática de mediados de los años 50 para resolver sus dificultades. Los líderes más reformis-

tas, agrupados en torno a Deng, tenían cambios más ambiciosos en mente. Sin embargo, como estaban ansiosos de evitar cualquier confrontación directa con sus colegas más conservadores y necesitaban urgentemente esgrimir alguna legitimidad popular, aceptaron al comienzo un enfoque más limitado. Para todos los interesados, el maoísmo se convirtió en la primera meta, obvia y fácil, de la reforma.

El maoísmo fue atacado primero en el punto en que podrían conseguirse retribuciones políticas y económicas mayores y en donde el sistema de estilo soviético era más débil: el sector agrícola colectivizado. En esta primera etapa de la reforma, que se prolongó hasta 1984, la dirigencia reformista presidió el cambio de la China rural, la cual pasó de la agricultura colectivizada a la agricultura familiar con base en contratos, ofreció una serie de nuevas oportunidades de libre mercado a los campesinos y elevó en cerca de un cincuenta por ciento los precios que pagaba el Estado por productos agrícolas básicos como los cereales y el algodón.

Los reformadores tomaron estas medidas audaces sin primero diseñar una estrategia clara de reforma, confiando más bien en su convicción de que se necesitaba algún tipo de fuerzas de libre mercado y empresa privada para compensar las deficiencias o ineficiencias en el sector de planeación estatal de propiedad pública. A mediados de los años 80 los éxitos cosechados en materia de reforma rural le habían otorgado a los reformadores suficiente influencia entre los líderes más conservadores como para que la vieja guardia aceptara con alguna reticencia apoyar las nuevas reformas que afectarían algunos de los fundamentos del sistema de estilo soviético.

En 1984 los reformadores comenzaron a dirigir su atención a otras áreas de la economía rural. La reforma del sistema de adquisiciones agrícolas obligatorias del Estado, anunciado a comienzos de 1985, tenía como objetivo reducir la presión ejercida sobre el sistema comercial estatal para que abordara los excesos de producción. Hasta ese momento un aparato comercial estatal insaciable había prometido comprar todo el cereal que vendieran los agricultores. En adelante el Estado compraría una cantidad limitada de cereales a precios fijos a través de contratos voluntarios suscritos con los campesinos; si se necesitaba cereal adicional, éste sería comprado a precios del mercado de cuando en cuando. Este nuevo arreglo tenía dos objetivos principales: contener los costos de los subsidios estatales al cereal, que habían crecido a medida que aumentaba la producción, y reorientar las decisiones de producción de los agricultores hacia productos escasos de acuerdo con los indicios del mercado.

Al propio tiempo, como dicha reorientación implicaría una fuerte reducción en los ingresos de los agricultores y en la utilización de mano de obra en las granjas, era preciso crear rápidamente nuevas oportunidades de empleo con el fin de evitar una migración masiva a las ciudades. Por lo tanto, los reformadores comenzaron a colocar énfasis creciente en el desarrollo de empresas en municipios y pueblos (EMP).

Algunas EMP evolucionaron a partir de las empresas comunitarias y de brigada que se desarrollaron en la era maoísta. Dichas empresas por lo general se concentraban en la producción industrial a pequeña escala de

8/ Para un análisis del dualismo en la teoría general sobre el desarrollo y el caso chino en particular, véase Louis Putterman, "Dualism and Reform in China", *Economic Development and Cultural Change*, de próxima publicación.

9/ Sobre el impacto ejercido por estas campañas en la China rural, o incluso por la anticipación de ellas, véase Zweig (nota 6).

maquinaria e instrumentos agrícolas, fertilizantes químicos de baja calidad, materiales de construcción y alimentos procesados sencillos. En 1978 había cerca de 1.5 millones de empresas de este estilo, las cuales proporcionaban empleo a aproximadamente 28 millones de personas<sup>10</sup>. En la era de la reforma las empresas se expandieron y se multiplicaron. A partir de 1985 disfrutaron de un fuerte aumento en producción, empleo y utilidades con la ayuda de inyecciones masivas de crédito (gracias a la política estatal central) y asignación preferencial de materiales, nuevos mercados e incentivos tributarios (gracias a las autoridades locales, las cuales percibieron estas empresas como una nueva avenida para acrecentar su propio poder económico). Algunas EMP formaron compañías de construcción que enviaban brigadas de mano de obra a las ciudades, otras se dedicaron a transporte de larga distancia; algunas subcontrataron trabajo de empresas urbanas de propiedad estatal o corporaciones de comercio exterior. En 1988 la China rural contaba con casi 19 millones de empresas rurales a nivel municipal e inferior (esto incluía una gran cantidad de pequeñas empresas privadas). Empleaban casi 100 millones de personas y representaban un asombroso veinte por ciento de la producción industrial nacional en 1988<sup>11</sup>.

Las reformas en el sector urbano, en gran medida de propiedad estatal, tardaron un poco más en despegar. Desde 1979 se habían introducido experimentalmente algunas reformas en las empresas urbanas, por la misma época en que Beijing comenzó a descentralizar los controles financieros. Sin embargo, tan sólo en el otoño de 1984 se introdujo un programa nacional de reformas industriales urbanas. El programa era vago y potencialmente contradictorio. Hacía énfasis en la descentralización, la reforma de precios, la competencia de mercado, el fortalecimiento de incentivos para gerentes y trabajadores y la internacionalización de la economía china.

Según la concebían los líderes de la reforma, la descentralización entrañaba la devolución del control sobre las utilidades empresariales, primero de los niveles centrales a los locales y más tarde, se esperaba, a las empresas mismas.

El gobierno cambió su base de ingresos, la cual pasó de estar basada en las utilidades remitidas por las empresas para sustentarse en los impuestos<sup>12</sup>. Como resultado de estas reformas, la participación proporcional del ingreso nacional comenzó a descender bruscamente. Los ingresos de los gobiernos central y locales se redujeron del cuarenta y seis por ciento del PNB en 1978 al treinta y siete por ciento en 1988. De dicha cifra, la participación del gobierno central se redujo del treinta y seis por ciento del PNB en 1978 a menos del veinte por ciento en 1988<sup>13</sup>. Entre tanto, las empresas estatales retuvieron una mayor parte de sus ingresos; en 1979 las empresas

remitieron cerca del ochenta y siete por ciento de sus ingresos; en 1988 la participación del Estado había descendido a poco menos del dieciséis por ciento.

Estas medidas de descentralización fueron diseñadas para mejorar el desempeño comercial de las empresas estatales, reorientándolas de manera que se alejaran de las cuotas de insumo y producto impuestas desde arriba y se rigieran más bien por las señales y las demandas del mercado. Las empresas se volverían gradualmente responsables de sus propias utilidades y pérdidas. Se suponía que el incentivo de utilidades iba a operar con más fuerza como resultado de la transición a tasas impositivas fijas. Con este objetivo en mente el gobierno instituyó un sistema de precios dual que mantenía las asignaciones estatales y las cuotas de ventas a precios fijos para una porción preestablecida de la producción, con lo cual se le permitía a la empresa comprar y vender a los denominados precios del mercado una vez hubiese cumplido sus cuotas. Con el aumento en la productividad, las cuotas de precio fijo representarían una proporción cada vez menor de la producción total y las empresas se orientarían cada vez más hacia el mercado. Por lo menos eso decía la teoría.

Diríase que el método del precio dual resulta excesivamente complejo, pero en ese momento parecía justificado como una forma de amortiguar el impacto de los precios ascendentes del mercado para los insumos y de atenuar la posibilidad de dicha escalada en un marco en el que muchas empresas claves eran virtuales monopolios y podían fijar cualquier precio de "mercado" que quisieran. Se suponía que alguna competencia limitada de las empresas colectivas y privadas iba a debilitar la posición monopólica de las empresas estatales, instándolas a responder mejor al mercado.

Estas medidas, combinadas con las reformas fiscales, tuvieron resultados notorios. Un estudio realizado en 1985 concluyó que las firmas encuestadas estaban dedicando en promedio sólo el cincuenta por ciento de su producción a programas de tipo obligatorio, y que una tercera parte de sus ventas no dependían de las agencias comerciales del Estado<sup>14</sup>. El control del Estado sobre los insumos industriales claves también disminuyó ostensiblemente. En 1979 el Estado asignaba el setenta y siete por ciento, el cincuenta y nueve por ciento y el treinta y seis por ciento del acero, el carbón y el cemento, respectivamente; en 1988 las proporciones habían disminuido a cuarenta y siete por ciento, cuarenta y cuatro por ciento y catorce por ciento.

Además de introducir incentivos de mercado y de utilidades a nivel empresarial, los reformadores intentaron fortalecer los incentivos gerenciales y laborales. Los reformadores criticaron el "tazón de hierro lleno de arroz", refiriéndose al empleo garantizado de por vida y al sistema de salarios igualitarios que no ofrecían incentivo alguno a los trabajadores. Sin embargo la reducción de los controles centrales sobre las empresas no necesari-

10/ Véase *China Statistical Yearbook 1990* (nota 2), pp. 386-387.

11/ *Ibid.*, pp. 386-387. Véase también Banco Mundial (nota 1), p. 68.

12/ En la realidad, empero, el gobierno central mantenía un firme control fiscal sobre varias de las regiones altamente industrializadas, incluyendo Shangai, Jiangsu y Liaoning, y siguió teniendo a su cargo una onerosa lista de gastos. Véase Minoru Nambu, "Problems in China's Financial Reforms", *JETRO China Newsletter*, No. 92 (mayo-junio 1991), p. 2.

13/ Banco Mundial (nota 1), p. 40.

14/ Andrew Walder, "Factory and Manager in an Age of Reform", *China Quarterly*, No. 118 (junio 1989), p. 243.

riamente dejó a los gerentes en libertad de aplicar programas de incentivos efectivos. Los trabajadores de empresas estatales han demostrado gran habilidad en la consecución de bonos independientemente de la productividad, pues muchos gerentes ansian sobre todo preservar la paz industrial. En vista de la influencia indiscutible de los trabajadores del sector estatal, no debe sorprender el hecho de que los líderes centrales hayan combatido la noción de eliminar las garantías laborales para personas con empleos existentes en el sector oficial. Se suponía que, para fines de los años 80, los nuevos empleados debían ser contratados temporalmente, con pocas o ninguna de las costosas gratificaciones disfrutadas por los trabajadores antiguos. Sin embargo, en la práctica, muchas firmas siguieron contratando de acuerdo con el antiguo método.

A nivel gerencial, se suponía que los directores iban a disfrutar de mayor autonomía en la toma de decisiones y que se les recompensaría por aumentar las utilidades de sus empresas. El poder que tenía el secretario del partido encargado de las empresas de interferir en asuntos gerenciales se iba a reducir, y se realizó un esfuerzo por utilizar experiencia gerencial y técnica —no sólo experiencia política— en la selección de los secretarios del partido.

Al darse cuenta de que todos estos cambios, incluso si resultaban completamente exitosos, no iban a producir la tasa deseada de crecimiento y modernización de la industria china, a mediados de los años 80 los dirigentes de la reforma comenzaron a hacer más énfasis en la internacionalización de las fuentes de capital, la tecnología y los mercados. Se instauraron zonas económicas especiales que ofrecían incentivos económicos no vigentes en el resto de la China para atraer inversionistas extranjeros; se buscaron inversiones en proyectos conjuntos y préstamos extranjeros, las compañías comerciales y las autoridades económicas locales incursionaron audazmente en los mercados internacionales. Estas medidas se cristalizaron en la "estrategia costera", que orientaba el tercio oriental del país hacia el capital extranjero y el comercio exterior como motor del desarrollo<sup>15</sup>.

Es claro que entre 1976 y 1988 sucedió algo en la China que puede llamarse legítimamente reforma, ya sea que los reformadores tuvieran o no una estrategia clara o una noción precisa sobre reforma. No obstante, si se pretende analizar las perspectivas de continuación del proceso de reforma en China, se requiere precisión sobre qué es lo que distingue una reforma de otros tipos de cambio.

En general, dicha precisión no existía en las discusiones chinas. La reforma era la prioridad máxima del PCC y, por lo tanto, la prueba de la permisibilidad; cualquier cosa que avanzara la reforma era buena y cualquier cosa que la frenara era mala. Sin embargo, tras diez años de experimentación y aplicación, el significado de la palabra siguió siendo elusivo, variando de acuerdo con el sentido en que soplaran los vientos políticos. Si esto parece algo confuso es porque en realidad lo era. No obstante, pese a

15/ Véase, por ejemplo, Fuh-wen Teng, "The Political Economy of China's Coastal Development Strategy: A Preliminary Analysis", *Asian Survey*, Vol. 31, No. 3 (marzo 1991), pp. 270-284.

a los numerosos cambios, había una serie constante de concepciones claves de reforma económica cuyo peso relativo varió con el tiempo. Estas eran las tres D: devolución, desestatización y despolitización.

La *devolución* entrañaba el traslado de recursos, iniciativa y control del centro a los niveles inferiores. La paradoja en este caso es que una relajación del poder central puede resultar en una "centralización" intensificada en los niveles inferiores, a medida que las autoridades provinciales y locales reclaman autoridad sobre empresas anteriormente controladas por el gobierno central<sup>16</sup>. Por lo tanto, la devolución de por sí no garantiza un mayor dominio de las fuerzas de mercado, aunque sí es una condición necesaria. El nivel en que se realiza la devolución resulta crucial; las autoridades provinciales y locales han demostrado ser hábiles en detener el proceso en el punto en que eleva al máximo su poder y sus recursos<sup>17</sup>. De hecho, hasta el grado en que las autoridades locales pueden bloquear las fuerzas del mercado (reforzando bloqueos comerciales para proteger industrias locales o existencias de cereales, por ejemplo), el crecimiento de las interacciones del mercado puede ser impedido por la descentralización.

La *desestatización* significa la reducción del papel directo y reglamentado del Estado en la economía, en calidad de dueño, productor, planeador u organizador de la producción. Esto puede suceder, ya sea a través de la renuncia abierta a ese papel o partes de él, o mediante el crecimiento de otros sectores. Los observadores extranjeros y algunos analistas chinos con frecuencia asumen que el último método consigue los mismos resultados que el primero, por ejemplo, que el papel ampliado de los sectores colectivo y privado tarde o temprano acabará por desplazar al sector estatal, lo hará renunciar o debilitará su poder hegemónico dentro de la economía.

Sin embargo, la desestatización puede ser concebida de modo muy distinto por quienes tienen visiones alternativas de lo que la reforma tiene que conseguir en último término. Puede significar sacar al Estado de aquellos sectores en que no tiene un buen desempeño (por ejemplo servicios y agricultura), con el fin de dejarle más campo de acción en aquello que puede manejar o manipular más efectivamente (por ejemplo la industria pesada); o puede significar sacar completamente al Estado de la participación directa en la economía. Puede significar transformar el sistema de propiedad de los medios de producción (por ejemplo privatizando la industria de propiedad estatal) o simplemente el sistema de dirección (por ejemplo eliminando el control directo de los organismos estatales sobre las empresas). Los debates más candentes en torno a la "reforma" se han referido al tipo de desestatización perseguida y, en especial, al futuro de la propiedad estatal y el lugar asignado a la empresa privada.

La *despolitización* significa la eliminación de intrusiones políticas directas en la actividad económica. Este objetivo ha sido defendido sólo de dientes para afuera por casi todos los participantes en el debate en torno

16/ Yves Chevrier, "Gestion et modernisation: L'entreprise chinoise face à l'état", *Revue Tiers-Mond* (Paris), Vol. 27, No. 108 (octubre-diciembre 1986), pp. 755-794.

17/ Minori Nambu (nota 13), pp. 3-4.

a la reforma. En su sentido ideal más completo, la despolitización significaría reemplazar todas las intervenciones administrativas en la economía por herramientas de política macroeconómica (impuestos, tasas de interés, etc.) que funcionan primordialmente a través del mercado. Sin embargo, en la práctica, la eliminación de intervenciones administrativas reglamentadas muchas veces causa perturbaciones económicas severas debido a la falta de políticas macroeconómicas adecuadas o a la debilidad o ausencia de las instituciones a través de las cuales tienen que operar los mercados.

En muchos casos la consecuencia ha sido intervenciones *ad hoc*, irregulares y personales de líderes políticos en distintos niveles. Mas si bien estas intervenciones pueden resolver las crisis a corto término, con frecuencia menoscaban la credibilidad a largo plazo de las políticas macroeconómicas o la viabilidad de las incipientes instituciones de mercado.

Los elementos de cada una de las tres *D* fueron encarnados en diversos grados en las políticas adoptadas durante la década de reforma. Si bien los principales dirigentes de la China por lo general convenían en la necesidad de devolución, desestatización y despolitización, diferían (tan radicalmente como para terminar precipitando la crisis política de 1989) sobre el significado de estos conceptos en la teoría y en la práctica. Básicamente sus diferencias abarcaban desde preferencia por un reajuste de la economía centralizada de planeación estatal, hasta un compromiso con la reforma "sistemática" a fondo, es decir, una transición a una economía de mercado integral.

Sin embargo, como dato interesante, casi nadie propuso el sistema más audaz de todos, la *desdualización* o eliminación definitiva de la serie de derechos y obligaciones que dividen fundamentalmente la China urbana y la rural. Incluso los reformadores más radicales tendieron a sostener que la economía de los cereales y el sistema de registro tenían que permanecer en su mayoría intactos en el futuro predecible.

### *Tiananmen y después*

LOS DIEZ AÑOS DE EXPERIMENTACIÓN y de serios esfuerzos de reforma condujeron a la China más lejos en el camino de la transformación que cualquier otra economía socialista hasta 1988. Desde luego, no todas las políticas de reforma emprendidas por China indujeron al tipo de cambios que presuntamente debían producir, y las empresas urbanas de propiedad estatal resultaron particularmente hábiles en absorber "reformas" sin alterar sustancialmente su comportamiento. Sin embargo, hacia fines de los años ochenta, la economía china operaba de modo muy diferente a diez años atrás.

El aparato estatal central había entregado un grado considerable de control directo sobre la producción y un grado enorme de poder financiero relativo. Se consideraba políticamente aceptable un cierto grado de orientación hacia las utilidades y los individuos podían buscar abiertamente ganancias materiales e incluso, en ocasiones, hacer alarde de ellas. En el curso de unos pocos años la economía china había pasado de una virtual autarquía a la dependencia de mercados y capital internacionales para su crecimiento continuado.

No obstante, en 1988, tanto la economía china como su proceso de reforma ya habían comenzado a reflejar problemas severos. La inflación, cuyos niveles no tenían precedentes en la China socialista, se disparó bruscamente en 1988, alimentada por subsidios estatales incipientes a los productos agrícolas y las empresas estatales que operaban a pérdida, salarios y bonos en el sector estatal que superaban considerablemente las ganancias en productividad, inversión descontrolada (la mayor parte a crédito) y empresas y gobiernos locales que experimentaban su autonomía económica recientemente adquirida. El anuncio de que los precios de muchos alimentos y bienes de consumo básico pronto quedarían sujetos a las fuerzas del mercado precipitó compras generadas por el pánico en muchas ciudades chinas. La producción de cereales se había estancado a partir de 1984, en tanto que el crecimiento de la población se aceleró. Decenas de millones de campesinos comenzaron a abandonar las zonas rurales, emigrando a las ciudades o a provincias más prósperas como Guangdong; las autoridades locales, alarmadas ante esta migración, comenzaron a regresarlos a la fuerza a sus lugares de origen. El desempleo entre los habitantes urbanos creció a medida que el Estado intentaba racionalizar el sistema laboral en las empresas estatales. La corrupción entre los funcionarios estatales y los gerentes de empresas que se beneficiaban con el sistema de doble fijación de precios había alcanzado, en opinión de la gente, niveles colosales, desmotivando a la fuerza laboral y ocasionando enormes pérdidas en numerosas empresas.

Si bien los orígenes de la crisis económica de finales de los años 80 con complejos, el papel de determinadas políticas de reforma en la configuración de dicha crisis es bastante aparente, sobre todo en lo que respecta a la función desempeñada por las reformas a medias. Las reformas, empero, no son exclusivamente responsables de la crisis económica de 1988-89. La culpa debe ser compartida por las políticas macroeconómicas adversas, el desperdicio y la ineficiencia en los sectores menos reformados y las perturbaciones que generalmente vienen con el crecimiento económico rápido y el cambio estructural en cualquier país en vías de desarrollo.

La crisis económica fue aparente para los chinos y los observadores extranjeros; la crisis política que irrumpió en la primavera de 1989 lo fue aún más. Lo que no fue tan visible fue la crisis incipiente en la política económica de la China y en las bases socioeconómicas del orden político estructurado a partir de 1949. Esa crisis se derivó de los efectos acumulativos de las políticas de reforma en tres pilares del orden posterior a 1949: el campesinado, los trabajadores y funcionarios urbanos, y la burocracia estatal del partido concentrada en la industria estatal urbana.

Los desarrollos económicos posmaoístas habían elevado claramente el nivel de vida de la mayoría de los habitantes rurales. Sin embargo, también habían acrecentado el nivel de inseguridad, habían creado grandes disparidades de ingresos y —debido al énfasis cada vez mayor en un desarrollo urbano y altamente tecnológico de estilo occidental— habían perjudicado el estatus simbólico del campesinado en el orden sociopolítico chino. La disolución del sistema agrícola colectivo y la creciente autonomía económica de los agricultores menoscabaron la habilidad de los cuadros rurales de ejercer

poder político mediante los métodos antiguos. Las reformas políticas no avanzaron lo bastante rápido o, en ocasiones, no siguieron las pautas requeridas para integrar a los habitantes rurales dentro de una nueva base masiva. De hecho, se crearon algunas circunscripciones para las reformas en el sector rural, ahora más diferenciado: pequeños empresarios que apoyaban las libertades de mercado, autoridades rurales que podían aumentar su influencia y sus ingresos mediante industrialización local, etc. Sin embargo, estas bases de apoyo por lo general eran fragmentadas, a veces en conflicto unas con otras y con frecuencia esperaban una retribución por cada concesión hecha a Beijing.

Es posible que los campesinos corrientes se hubiesen contentado originalmente con el nuevo trato ofrecido en la era de la reforma: entregar los cereales exigidos por el Estado y quedarse con el resto de lo que se producía para guardar o vender. Sin embargo muchos campesinos se habían vuelto cada vez más inconformes al percibir las utilidades que rendían otros oficios. El problema se agravó particularmente en 1988 cuando las autoridades locales, necesitadas de dinero, entregaron pagarés a los campesinos por las ventas obligatorias de productos agrícolas al Estado. Esto no significa que el campo representara un vasto pozo de descontento dirigido contra el Partido Comunista y sus políticas, pero sin embargo sí significa que los antiguos cimientos de la integración de la China rural en el orden político se habían erosionado, que se tenían que construir unos nuevos y que comenzaban a hacerse evidentes las tensiones.

La segunda base masiva de apoyo del partido estaba compuesta por empleados y funcionarios urbanos, grupos en gran parte creados por el proyecto comunista posmaoísta. El sector estatal incipiente de la China empleaba una fuerza laboral de menos de dieciséis millones en 1952; en 1987 había aumentado en más de un quinientos por ciento, hasta alcanzar la cifra de 96,5 millones. Los empleados de empresas colectivas urbanas, una cantidad insignificante en 1952, habían crecido a 35 millones en 1987<sup>18</sup>. La vida no era exactamente el paraíso para los chinos urbanos en la era maoísta, pero el régimen sí se encargaba de su seguridad económica básica mediante el suministro de alimentos y vivienda extremadamente baratos, así como empleo seguro para ellos y sus hijos. Si bien los intelectuales fueron atacados retóricamente y literalmente durante la Revolución Cultural, constituían una proporción pequeña de la cantidad total de empleados estatales. Para la mayoría de los habitantes urbanos la sensación de ser mejor valorados que los intelectuales, los niveles de vida en ascenso gradual y la ausencia de disparidades de ingresos pronunciadas contribuyeron a mantener una base de apoyo al régimen que en términos generales soportó las tempestades de la década de la Revolución Cultural casi hasta el fin.

La era de la reforma abrió una caja de Pandora repleta de asuntos que menoscabaron esta base masiva. Al comienzo los residentes urbanos

resintieron el aumento supuestamente más rápido en ingresos de los campesinos, pese a que, una vez contabilizados los subsidios, la brecha entre los ingresos rurales y urbanos se estuviera ensanchando. Más tarde, las crecientes diferencias en ingresos dentro de la población urbana comenzaron a suscitar rencores cada vez más fuertes. La nueva riqueza conspicua de algunos empresarios privados y de parientes de funcionarios de alto nivel, y los salarios más elevados que devengaban los empleados de empresas conjuntas o de propiedad estatal contribuyeron a la inconformidad generalizada, independientemente del hecho de que a los descontentos les estuviera yendo mejor que cuando se iniciaron las reformas. Como observó un sociólogo chino, "todo el mundo puede encontrar a alguien a quien le esté yendo mejor". El factor de envidia es poderoso y ha contribuido a carcomer la legitimidad del régimen.

Al propio tiempo, las demandas planteadas al régimen aumentaron con las expectativas crecientes de un mejor nivel de vida de los residentes urbanos y su sensación de inseguridad (ya fuere objetivamente justificada o no) ante cada nuevo precio, empleo y otras iniciativas de reforma. Durante casi treinta años los chinos urbanos habían vivido en un mundo políticamente inestable pero económicamente predecible. Lo que obtuvieron en la década de la reforma fueron promesas de estabilidad política (a veces desafortunadamente incumplidas, aunque nunca en el grado vigente durante la Revolución Cultural) y mensajes cada vez más sonoros de que la inseguridad económica de los individuos era el único camino seguro hacia el mejoramiento económico de la nación. Debe anotarse que los miembros conservadores de la dirigencia del PCC con frecuencia interpretaron este mensaje como violatorio de la misma razón de ser del partido. A semejanza de lo ocurrido en el campo, la reforma sí creó o atrajo determinadas circunscripciones, pero éstas eran con demasiada frecuencia *ad hoc*, no representativas de la totalidad y en conflicto potencial unas con otras.

Las reformas también le propinaron un duro golpe a la burocracia estatal del partido que dirigía el sistema industrial estatal y su sistema financiero asociado. En primer lugar, las reformas financieras redujeron la influencia de los ministerios de industria del Estado que antes habían suministrado la parte leonina de los ingresos del gobierno central. En segundo lugar, las reformas de las empresas amenazaron con eliminar la mayor parte de sus funciones. Para un sector de la burocracia estatal que siempre había disfrutado de ventajas en la negociación de planes, recursos y políticas económicas, esto constituyó un trago bastante amargo. Al final de la década de reformas, muchas burocracias independientes a todos los niveles estaban compitiendo por una participación en los recursos financieros, ejerciendo influencia económica y pugnando por extender su autonomía. Las autoridades rurales auspiciaron las EMP, los funcionarios municipales promovieron empresas en sus propias jurisdicciones, e inclusive las oficinas gubernamentales suboficiales cultivaron a los pequeños empresarios privados como fuentes exclusivas de ingresos financieros.

Los conservadores del PCC tenían un marcado sesgo en favor de la burocracia industrial estatal, muchos de ellos habían ascendido a través de

18 / Oficina de Estadísticas del Estado, *China Statistical Yearbook 1988* (en chino Beijing: Statistical Publishers, 1988), p. 153.



sus filas y mantenían vínculos estrechos con ella. Puesto que percibían este sector como el fundamento irremplazable del orden socialista, el contraste entre la influencia cada vez menor del sector industrial estatal y la autonomía y la riqueza crecientes de las empresas privadas y colectivas generaron sospechas, si no alarma. La crisis económica de 1988-89 les brindó una oportunidad conveniente para detener el proceso de reforma, a medida que la dirigencia del PCC e incluso muchos defensores de la reforma se dividían en cuanto al siguiente paso a dar.

Sin embargo el impase político de fines de los años 80 no se confinó a la estructura de poder del PCC, sino que tenía sus raíces en los cambios ocurridos en las bases de masas rurales y urbanas. Las protestas urbanas generalizadas ocurridas en la primavera de 1989 revelaron con dramática claridad el grado hasta el cual la dirigencia del partido no sólo había perdido liderazgo, sino también el control sobre la población urbana. Más aún, aunque el campo no desempeñó un papel protagónico en el drama político de 1989, muchos migrantes rurales a las ciudades sí participaron en las protestas urbanas y el fermento parece haberse extendido a muchos pueblos rurales, sobre todo los que quedaban cerca de las grandes ciudades. Con todo, sería un error atribuir las protestas a motivos puramente políticos o asumir que la mayoría de los manifestantes apoyaba la reforma económica. Muchos de los trabajadores de las fábricas, los oficinistas, los obreros de la construcción, los agricultores y los intelectuales que marcharon o vitorearon las marchas en la primavera de 1989 estaban preocupados por la inflación, furiosos contra quienes creían que se estaban enriqueciendo mientras sus propios ingresos comenzaban a estancarse y alarmados con respecto a la seguridad laboral, sólo apoyaban nuevas "reformas" en la medida en que afectarían a otras personas pero en ellos mismos. Nadie, ya fuera reformador o conservador, podía diseñar un programa que resultara satisfactorio para todas las circunscripciones.

La represión de junio de 1989 contuvo la crisis política inmediata, pero el cambio de táctica experimentado por la victoriosa coalición central de partidarios de la línea dura (que constituían una amalgama de ideólogos e intereses burocráticos), los líderes regionales y los reformadores tecnócratas no promete mucho para resolver la crisis subyacente en la economía política china. Quizás sea imposible volver a unir los pedazos rotos, pero pretender que nada sucedió no conduce al país a ninguna parte. Sin embargo los dirigentes actuales parecen empeñados en mantener esa pretensión. Su intento de avanzar desde el punto de vista económico mientras echan para atrás el reloj del cambio sociopolítico ha generado una serie de políticas que recuerdan el sueño de un esquizofrénico: una mezcla de componentes cautelosamente pragmáticas, medidas orientadas al mercado, "mejoras" tecnocráticas y anuncio del centro-derecha de sus intenciones de interferir directamente en la actividad económica. La mezcla utilizada desde junio de 1989 consiste en medidas de austeridad acentuadas tendientes a estabilizar la economía, expansión de exportaciones, contracción de importaciones y atracción de capital extranjero, e introducción cautelosa de reformas parciales simultáneamente con el fortalecimiento de numerosas medidas estrecha-

mente asociadas con la planeación central tradicional. Entre las medidas de reforma orientadas hacia el mercado se encuentran los cambios en el sistema de comercio exterior, la reducción de determinados subsidios, algunas reformas de precios y experimentación con los mercados de valores. No obstante, si bien varios documentos claves de política y el octavo plan quinquenal incluyen algunas medidas aparentemente reformistas, le incluyen a la mezcla política tal cantidad de elementos estatizantes y centralizantes que cualquier intento serio de reforma parece destinado a fracasar desde el inicio.

**Austeridad.** Las medidas de austeridad adoptadas con miras a conseguir la estabilización económica se introdujeron por primera vez a fines de 1988, pero sólo tuvieron un efecto limitado después de la represión de mediados de 1989. La coalición conservadora, que se fortaleció en junio de 1989, colocó el énfasis de su política económica en la estabilización a base de austeridad, instituyendo controles mucho más estrictos sobre el sistema bancario, intensificando la inspección de decisiones de inversión local e imponiendo ventas obligatorias de bonos a los empleados estatales para enfriar la economía. La inversión estatal se redujo en un veinte por ciento y varios proyectos fueron pospuestos o cancelados. El Banco de China impuso severas limitaciones a la expansión del crédito y comenzó a supervisar sus sucursales locales para asegurarse de que los funcionarios cumplieran la restricción de crédito de Beijing.

Estas medidas pusieron freno a la expansión de nuevos proyectos de inversión de capital y al crecimiento de la factura salarial en las empresas estatales. Los controles directos de precios y la aplicación de los toques legales de los precios "de mercado" contribuyeron a frenar los incrementos de precios. La inflación oficial se redujo de una tasa anual del veintiséis por ciento en diciembre de 1988 a una tasa anual del dieciocho por ciento en 1989 y de dos por ciento en 1990<sup>19</sup>. Sin embargo las medidas de austeridad resultaron en cierto sentido *demasiado* exitosas. Contrajeron severamente la demanda y el empleo interno y generaron altos niveles de desempleo y subempleo en las áreas rurales.

**Comercio exterior, crédito e inversión.** La dirigencia posterior a Tiananmen realizó grandes esfuerzos para aumentar las exportaciones de China y atraer nuevos inversionistas extranjeros con miras a reemplazar aquellos que consideraron el ambiente posterior a la represión demasiado repulsivo o demasiado arriesgado. Las firmas que producían artículos de exportación recibieron prioridad en créditos y los funcionarios del sector comercial se esforzaron por conquistar los mercados exteriores, con frecuencia ofreciendo precios muy bajos por bienes chinos (lo cual ocasionó acusaciones de *dumping*). Entre tanto, la contracción del crédito interno, unida a severos controles de importación, produjo una brusca disminución en las importaciones.

En el corto plazo, estas iniciativas mejoraron la balanza de pagos y atenuaron las preocupaciones inmediatas en cuanto a la capacidad de China

19. Banco Mundial (nota 1), p. XIV; Elizabeth Cheng, "Credit Needs Fuel Inflation", *Far Eastern Economic Review* (en adelante *FER*), agosto 9, 1991, p. 28.

de reembolsar los préstamos extranjeros que comenzaban a vencerse en 1991 y 1992<sup>20</sup>. Un fuerte aumento en inversiones originadas en Hong Kong y Taiwan compensó la disminución inicial de fondos japoneses y occidentales. La congelación de los préstamos occidentales a China, impuesta en los albores de la masacre de junio de 1989, comenzó a ceder en el verano y el otoño de 1990 cuando, primero Japón y luego la Comunidad Europea anunciaron sus intenciones de otorgar crédito.

Sin embargo es poco probable que en el largo plazo China siga siendo un país atractivo para la inversión y el crédito extranjeros sin que se plantee una transformación más profunda del sistema interno. De hecho, muchos empresarios taiwaneses se han sentido muy desilusionados por los bajos rendimientos de sus inversiones, por la interferencia burocrática y por la labor descuidada de los trabajadores continentales. Como consecuencia, han vuelto a dirigir su atención a otros lugares, sobre todo el sureste asiático, en busca de oportunidades de inversión<sup>21</sup>. Las nuevas inversiones taiwanesas en Xiamen, que constituye el principal centro de atracción para el capital de Taiwan, disminuyeron en un ochenta y cinco por ciento entre comienzos de 1990 y comienzos de 1991<sup>22</sup>. El interés de los inversionistas occidentales en China se ha ido recuperando, pero la inversión promedio sigue siendo inferior a la registrada en la época anterior a la represión. De otra parte, a semejanza de lo que ocurre con el capital de Taiwan y Hong Kong, la inversión occidental se ha dirigido sobre todo a industrias de bajo nivel tecnológico y utilización intensiva de mano de obra, en vez de a las industrias de alta tecnología y utilización intensiva de capital que el gobierno chino quiere promover como destino del capital extranjero.

En el frente del comercio exterior es posible que China haya tenido demasiado éxito en mejorar su balanza comercial. Su balanza comercial, extremadamente favorable, ha suscitado recientemente quejas de Estados Unidos, su tercer socio comercial, e instado discusiones sobre retaliación contra el presunto proteccionismo chino<sup>23</sup>.

En su mayor parte las reformas del sistema de comercio exterior todavía no han entrado en vigor, de manera que aún no pueden predecirse sus consecuencias. Casi todos los cambios realizados entre 1989 y comienzos de 1991 parecen indicar una mayor centralización. Por el otro lado, en lo que constituye un importante cambio, la China ha devaluado gradualmente el yuan, de modo que su moneda se acerca ahora a los niveles del mercado<sup>24</sup>.

20 / En marzo de 1991 las reservas de divisas extranjeras se situaban alrededor de los US\$35.000 millones. Los reembolsos de deuda externa ascenderán a aproximadamente US\$4.000-5.000 millones anuales durante los próximos años. Cheng (nota 19).

21 / Varios artículos publicados en diversos ejemplares de *The Journalist*, (Hsin tsunwen) y *The Nimerics* (Chia-shih pien-tai, edición de Taiwan) en el verano de 1991 esbozaron los factores que impulsan las inversiones de Taiwan en el continente y la desilusión de los inversionistas taiwaneses con los resultados. Ese análisis se basa en mis entrevistas con empresarios y académicos en julio y agosto de 1991.

22 / "Zones Go It Alone", *FEER*, agosto 8, 1991, p. 31.

23 / "Shifting the Trade Balance", *FEER*, agosto 8, 1991, p. 38.

24 / Agencia Central de Inteligencia (CIA), *Directorio de Inteligencia, The Chinese Economy in 1990 and 1991: Uncertain Recovery* (Springfield, VA: National Technical Information Service, 1991), pp. 29-33. Un efecto secundario de las devaluaciones ha sido la terminación del mercado negro de cambio de divisas.

Las nuevas medidas anunciadas recientemente permitirán a más empresas realizar negocios de exportación por su cuenta sin tener que pasar por la burocracia estatal. Asimismo, los ajustes en las reglamentaciones sobre retención de divisas extranjeras por parte de las empresas dejarán una mayor cantidad de divisas en manos de casi todas las compañías. Además de estos cambios, en enero de 1991 el gobierno central dejó de subsidiar las pérdidas sufridas por las empresas en sus negocios de exportación.

**Reformas de precios y subsidios.** Otros subsidios, sobre todo los que benefician a los consumidores urbanos, están siendo disminuidos gradualmente. En abril de 1991 el gobierno aumentó los precios minoristas de los cereales y el aceite comestible en las ciudades, reduciendo sustancialmente su enorme factura de subsidios a los alimentos. El sistema de vivienda urbana, fuertemente subsidiado por unidades de trabajo y gobiernos municipales, está siendo modernizado. Los gobiernos locales tienen órdenes de diseñar planes para aumentar los alquileres, instar a los residentes a comprar vivienda o extraer grandes "depósitos de alquiler" que ayudarán a pagar los costos de construcción de nuevas viviendas. Hasta cierto punto los ahorros en ingresos pueden ser ilusorios; ha sido práctica común que el gobierno compense a los residentes o empleados con algunos subsidios directos cada vez que aumentan los precios de los productos subsidiados. En la actualidad los residentes urbanos están recibiendo subsidios directos que probablemente suman cerca de 19.000 millones de yuans anuales (unos US\$3.300 millones a la tasa de cambio actual).

Estos cambios en los sistemas de subsidios son un indicio de la reforma de precios que en la actualidad se está realizando, si bien con bastante cautela. Luego del fortalecimiento de los precios fijos y las asignaciones planeadas de muchas materias primas durante el periodo de austeridad, el gobierno central comenzó a acercar los precios controlados de determinadas materias primas, sobre todo acero y cemento, a los niveles del mercado vigentes a comienzos de 1991. No obstante, los precios controlados, incluso para un porcentaje pequeño de bienes, podrían ejercer un impacto desproporcionadamente fuerte sobre los costos de los productores y sobre la libertad real de otros precios.

**Reformas en las empresas.** ¿Y qué puede decirse sobre reformas industriales adicionales? En este caso la esquizofrenia de la actual dirigencia central se pone verdaderamente de presente. En 1991 varios importantes documentos de política se refirieron a los planes para la industria<sup>25</sup>. Proponían varias medidas ostensiblemente reformistas, incluyendo el aumento de la autonomía empresarial, la expansión de la tenencia de acciones, la aplicación de las leyes de quiebra, la reducción del alcance del plan obligatorio y la expansión del papel de los mercados y precios libres. Sin embargo estas medidas fueron contrarrestadas por iniciativas claramente centralistas.

25 / Estas fueron las "Once Medidas" para empresas del Consejo de Estado, anunciadas en mayo de 1991, sus "Principales Aspectos de la Reforma de la Estructura Económica", promulgada a mediados de junio de 1991, y el Octavo Plan Quinquenal, anunciado en marzo de 1991.

Otras iniciativas que contienen elementos parciales de mercado son contrarrestadas, por ejemplo, mediante explicaciones detalladas sobre la forma en que las empresas pueden gastar sus utilidades en aumento, y mediante la afirmación del compromiso del nuevo plan en la estructuración de grandes "grupos empresariales" que "ejercerán gradualmente dirección unificada sobre las empresas asociadas", operarán de acuerdo con objetivos planeados y asumirán una "función esencial en la economía nacional"<sup>26</sup>. Otros planes centralistas para revitalizar la industria estatal incluyen la denominada garantía doble: a cambio de pagar impuestos y entregar sus utilidades y una porción de sus productos al Estado, las empresas estatales recibirán acceso preferencial al transporte, el crédito, la energía y otros insumos cruciales. Y se está presionando a los bancos para que otorguen créditos tendientes a salvar empresas que no han podido vender sus productos. En términos generales, los planes actuales para la industria china parecen favorecer ese antiguo talismán estalinista, el gigantismo, y confiar en la nueva tecno-

logía. Pero el crecimiento industrial se ha recuperado desde comienzos de 1990, de manera que, ¿para qué preocuparse por la reforma? En primer lugar, porque las ganancias provienen sobre todo de fuera del sector estatal que absorbe la mayor parte de la inversión del Estado, las asignaciones preferenciales y los subsidios. En los primeros cinco meses de 1991 las tasas de crecimiento industrial en el sector colectivizado fueron más de dos veces superiores a las del sector estatal, y las del sector privado casi cinco veces superiores.

En segundo lugar, el "crecimiento" registrado en el sector estatal entraña un costo prohibitivamente alto que todavía está por pagar. Las empresas de propiedad estatal siguieron operando ineficientemente, consumiendo demasiadas materias primas, aumentando sus facturas salariales más rápido que su productividad o su rentabilidad y absorbiendo enormes cantidades de crédito y de subsidio estatales, muchas veces sólo para poder continuar funcionando. Las empresas estatales chinas requirieron aproximadamente 56.000 millones de yuans en subsidios gubernamentales y 84.000 millones de yuans en "pérdidas cubiertas" en 1991. Incluso después de descontar las utilidades y los impuestos que las empresas estatales remiten a las arcas del gobierno, las empresas de propiedad del Estado resultan siendo las ganadoras netas, con casi 13.000 millones de yuans<sup>28</sup>. En otras palabras, algún otro sector tiene que sufragar los costos de esta transferencia de recursos al sector industrial y comercial del Estado, que es notablemente ineficiente.

Las empresas estatales han seguido funcionando sólo con inyecciones masivas de subsidios y crédito. Durante 1990 y 1991 el crédito central otorgado a las empresas estatales ha atravesado un par de ciclos de prosperidad- crisis, contrayéndose cuando se temía una alta tasa de inflación y luego expandiéndose cuando el desplome industrial resultante hacía temer disturbios sociales. La disponibilidad de crédito ha variado tan radicalmente que las tendencias desestabilizadoras de la economía a largo plazo pueden magnificarse a medida que las empresas se apresuran a conseguir crédito tan pronto éste se expande, independientemente de que lo necesiten o no.

**Reforma agrícola y rural.** Después de varios años de negligencia, tanto en políticas como en asignación de recursos, la agricultura y, sobre todo, la producción de cereales, ya se habían convertido en una preocupación importante para el gobierno en 1989. Beijing respondió anunciando unos fuertes incrementos en el precio del productor ese año (lo cual aumentó masivamente su carga de subsidios). Al mismo tiempo, el Estado comenzó a referen-

cionar el crecimiento de la producción de cereales a una práctica facilitada: la ración de cereales que supuestamente un esfuerzo burocrático hacía el aumento en la producción. Este recurso a medidas que los agricultores no querían, sino de que las se aplicaran, no sólo afectó el cultivo de cereales sino también la eficiencia de las inversiones incipientes (por ejemplo, el riego).

El resurgimiento incipientes parecen estar siendo desahucados, molestados y desatendidos, a veces más concertados, esto, algunos observadores dicen que se producirá inexorablemente. Tal optimismo pagado, que cualquier cosa que se haga en el sector estatal. Ahora bien, aun cuando se menoscabe el apoyo a las cosas que lo refuerce, las cosas ciertas. Es posible que algunas formas que están siendo

26 / IBS, mayo 30, 1991, pp. 35-36.

27 / Chung (nota 19), p. 30.

28 / Chung Daily, septiembre 4, 1991, p. 4; Chung (nota 19), p. 30. Es importante tener en mente que si se han presentado mejoras en eficiencia en algunas empresas de propiedad estatal y que no todos los problemas de rentabilidad se derivan del fracaso en mejorar la eficiencia. Por ejemplo, los incrementos en competencia en mercados antiguamente monopolísticos han disminuido las tasas de rentabilidad, incluso en las empresas con un funcionamiento relativamente eficiente. Véase Naughton (nota 19). Véase también Sandy Hendry, "The Heavies Turn Again", IBS, agosto 5, 1991, p. 38.

29 / IBS, noviembre 22, 1990,

gan su propio camino utilizando algunas medidas de cuasi reforma y otras que no lo son. De otra parte, si bien las autoridades regionales y locales pueden actuar independientemente de Beijing, no siempre permiten que quienes están por debajo de ellos hagan lo propio. De hecho, cuando la situación se torna difícil, las provincias e incluso los condados tienden a recurrir al proteccionismo local para preservar el mercado interno para sus propios productos y para mantener a la mano las materias primas necesarias y los bienes de consumo básicos<sup>30</sup>.

Uno sospecha que los líderes locales y regionales apoyan, o al menos toleran, las reformas descentralizantes o desestatizantes, no por un compromiso profundo con dichas reformas en sí, sino básicamente porque creen que dichas medidas les permitirán tener un mayor control sobre los recursos. En otras palabras, cuando les resulte favorable actuarán como reformadores y, cuando les convenga otra cosa (como suele suceder), no tendrán en cuenta las medidas reformistas. El argumento de los optimistas es que el crecimiento de la autonomía regional de alguna manera afianzará las fuerzas que favorecen la reforma. De hecho, en ausencia de una estrategia de reforma clara, el regionalismo tan sólo afianza las fuerzas que favorecen el regionalismo. Dichas fuerzas pueden corresponder o no a los intereses de las políticas de reforma en cualquier instante dado, pero no contribuyen a institucionalizar la reforma.

Nada de lo anterior significa que la economía china atraviesa graves problemas. La cosecha de cereales de 1990 fue un éxito extraordinario: 435 millones de toneladas, un cuatro o cinco por ciento más alto de lo que auguraban las estimaciones más optimistas de mediados del año. Después de la recesión de 1989 y la lenta recuperación de 1990, la industria comenzó a despegar de nuevo en 1991. Los ingresos en las áreas tanto rurales como urbanas estaban creciendo en 1991.

La preocupación central no se refiere al corto plazo sino a los plazos mediano y largo. Las ganancias a corto término se han producido a un costo económico alto y un costo político potencialmente elevado. De no producirse las reformas más significativas que figuran actualmente en la agenda, estos costos no se podrán pagar y se incurrirá en costos todavía mayores a medida que pase el tiempo. En algún momento tendrá que hacerse la evaluación.

### ¿Reforma o reajuste?

EN 1989 UNO DE LOS EXPERTOS OCCIDENTALES, a quienes las autoridades chinas suelen recurrir en busca de asesoría sobre reforma y política económica, se detuvo en medio de una conversación que sostenía conmigo para preguntar, con una mezcla de esperanza y desesperación, si alguien, en algún lugar, había descubierto la mejor forma de reformar una economía so-

cialista. Al evaluar el estado de la reforma y sus implicaciones para el bienestar de China es importante reconocer que, si bien quizás podamos detectar y analizar lo que está *mal* en la economía, y si bien puede haber fórmulas específicas para hacer determinadas cosas mejor, todavía no hemos hallado una fórmula satisfactoria para hacerlo *todo* bien. Conocemos el inicio, pero no el final.

Desde luego, algunas personas dirían que el punto final obvio y el único que puede funcionar es la construcción de una economía capitalista. Dejando por el momento de lado la cuestión sobre si la actual dirigencia china permitiría tal medida, es dudoso que el pueblo chino pueda aguantar una rápida transformación a una economía de estilo capitalista ahora que han visto las angustias de la transición en Europa central y oriental. Para muchos chinos tal transformación significa tasas de desempleo altas y crecientes, precios de vivienda más elevados y la adquisición por parte de extranjeros de muchas de las principales empresas industriales, para mencionar tan sólo algunos de los aspectos desagradables.

De otra parte, aunque uno puede detectar en China bastante evidencia de las consecuencias negativas de una reforma parcial, los resultados netos conseguidos hasta el momento y las perspectivas de mejoramiento incremental todavía pueden ofrecer algunas esperanzas. Un economista del Banco Mundial planteó hace poco la posibilidad de que el camino chino pueda ser mejor que la sabiduría aceptada que se está aplicando en Polonia, Hungría y otros países, sobre todo cuando se tienen en cuenta los costos sociales que entraña el método de transformación total inmediata<sup>31</sup>.

El hecho de que la reforma en China todavía esté incompleta y rebose de contradicciones no justifica por sí solo el pesimismo. La verdadera razón del pesimismo es que el sistema ha superado el punto en que las reformas pueden detenerse en reajustes del sistema económico. El proyecto de reforma tiene que atacar la esencia misma del antiguo sistema de estilo soviético, para dismantelar la estructura dual que favorece a la ciudad en comparación con el campo y a las empresas de propiedad estatal con relación a todo lo demás. Sin algún tipo de transformación de este sistema dual, el futuro del proyecto de reforma y de la salud económica de China quedan seriamente en entredicho.

Los actuales dirigentes chinos se interponen en una transformación semejante. Después de la masacre de Beijing aplazaron el momento de la evaluación imponiendo la represión política y económica y promoviendo un impulso masivo de exportaciones para mantener a flote la debilitada economía interna. El colapso total de los regímenes comunistas en Europa oriental y la Unión Soviética ha fortalecido la oposición de los dirigentes chinos a una reforma económica o política más sustancial. Cada nuevo sobresalto político en el exterior provoca mayores restricciones políticas en China, en

30 / FEER (nora 22), pp. 102-103.

31 / Indrajit Singh, "Is there Schizophrenia about Socialist Reform Theory? Some Thoughts about the Two-Track Approach", *Transition: The Newsletter about Reforming Economies*, Vol. 2, No. 7 (julio- agosto 1991), pp. 1-4.

vez de un intento serio de idear la manera de realizar la reforma sin que se produzca un colapso político o económico.

El resultado ha sido la arteriosclerosis política y económica. La lista de tópicos imposibles de mencionar en discusiones económicas ha aumentado desde Tiananmen. Temas que los académicos saben que resultan cruciales para resolver el dilema económico actual son, según me dijeron repetidamente en el verano de 1991, demasiado delicados para que se escriba sobre ellos o se planteen en debates abiertos. Irónicamente, es probable que esta represión de las discusiones sobre temas nacionales perjudique al régimen conservador: al no existir un debate interno dinámico que genere nuevas ideas, las únicas concepciones bien formuladas sobre la reforma sustantiva provendrán del occidente capitalista.

Por lo tanto, la agenda de la reforma ha quedado congelada en aspectos claves en comparación con el punto en que se encontraba a mediados de 1988, cuando la dirigencia del PCC se dividió con respecto a la dirección futura de la reforma. Los economistas de ideas reformistas también se dividieron por la misma época. Algunos defendían una reforma de precios más audaz. Otros (incluyendo la mayoría de los economistas más jóvenes) sostenían que la reforma de precios resultaba potencialmente contraproducente sin una eliminación previa del bloqueo del "sistema de propiedad": propiedad estatal (y protección) de los medios claves de producción, que es la vaca sagrada de la dirigencia del PCC y el mayor problema en opinión de muchos, quizás la mayoría, de los economistas de ideas reformistas. Hacia fines de 1988 numerosos reformistas estaban proponiendo una gran variedad de medidas para aumentar la eficiencia y la productividad de las empresas de propiedad estatal, incluyendo tenencia de acciones por parte de instituciones públicas, propiedad por parte de los trabajadores y privatización.

Sin embargo, el "sistema de propiedad" es tan sólo la punta de un enorme témpano de hielo, y dicho témpano es la amenaza real que se cierne sobre cualquier reforma sistemática de la economía china. No es el socialismo *per se* el que se interpone en el camino de la reforma sistemática. Es más bien el tipo de socialismo instaurado en los años cincuenta: basado en y limitado por la economía política centrada en las ciudades, con el subsiguiente sistema de casta social y los derechos que éste reclama.

Simple y llanamente, la China urbana y la rural son dos castas separadas. Viven en mundos diferentes, con grandes disparidades en materia de derechos sociales y económicos y en la influencia política. El ansiado registro urbano en China ha garantizado a sus tenedores acceso a alimentos baratos, empleo, educación de mayor calidad, vivienda poco costosa y atención médica, y a una serie de servicios sociales y oportunidades culturales ofrecidos a costo nominal o sin costo alguno. La China rural no disfruta de estas garantías y prácticamente no tiene oportunidad alguna de adquirirlas. Teóricamente, el desarrollo económico deberá acercar cada vez más el nivel de vida rural a los niveles urbanos. Esta era la teoría que sustentaba el hoy desacreditado modelo maoísta de desarrollo con base en los colecti-

vos rurales. También ha sido la presunción que subyace las reformas rurales posmaoístas.

Las reformas acabaron por estrellarse contra el sistema de castas y sus corolarios políticos y económicos: el régimen no puede renunciar a su compromiso de suministrar a las ciudades cereales baratos y le es imposible permitir que las empresas de propiedad estatal se desplomen. La estrategia de reajuste para las áreas rurales —ofrecer nuevas oportunidades además del sistema de cereales— funcionó durante algún tiempo. Sin embargo, finalmente sólo sirvió para destacar cuánto perjudicaba a los agricultores el sistema de cereales, y luego los recursos fueron trasladándose de la agricultura a empresas más rentables.

El reajuste en la economía urbana — permitir nuevas modalidades de actividad económica en las márgenes del sistema operado por el Estado, interferencia con los precios, etc.— nunca suministró suficientes estímulos ni desincentivos para inducir importantes mejoramientos en eficiencia en las empresas de propiedad estatal. Mientras tanto las empresas colectivas y privadas fueron relegadas a una posición decididamente dependiente y constreñida. Mantener esta economía "reformada" de mala calidad se ha vuelto muy costoso.

El principal problema que afronta la dirigencia china es que cualquier amenaza básica contra la economía política tradicional menoscaba su legitimidad ya de por sí débil. Esto era cierto incluso antes de que irrumpiera el movimiento popular en la primavera de 1989. Ahora lo es más y contribuye a explicar el contraste entre el enfoque cauteloso adoptado con respecto a los salarios urbanos, el empleo y los problemas de precio, y el deseo muchas veces arrogante de obligar al sector rural a depender de sus propios medios o a exigir que los agricultores entreguen sus productos a precios muy bajos cuando la subsistencia urbana parece amenazada. Existe unanimidad virtual en la dirigencia fragmentada del PCC en torno a un solo punto: si se le pone a escoger entre la ciudad y el campo, el régimen primero intentará encontrar alguna manera de no tener que elegir. Sin embargo, cuando no le quede otro remedio que elegir, siempre saltará triunfante la ciudad.

El no haber podido abordar este dualismo ha menoscabado las perspectivas de institucionalizar la reforma en el largo plazo. La dirigencia central se ha visto atrapada en una serie interminable de crisis y cuasi crisis, a medida que la descentralización y la desestatización limitada han ido debilitando la base financiera del gobierno central, privándolo de los recursos necesarios para inducir la complacencia de los gobiernos y las empresas locales con las políticas centrales. Beijing ha respondido con un estilo de manejo de crisis que fue uno de los pilares del sistema político chino en la época de Mao: dirigir la atención de los administradores a la resolución de un problema particular mediante el traslado de recursos de otros sectores, dejando que estos se defiendan solos hasta que también ellos entren en estado de crisis. Los sucesos de los últimos dos años si mucho han creado más ocasiones y mayor necesidad de tales intervenciones, a medida que aumenta la capacidad regional de resistir el control central, las intervenciones de movilización de Beijing se han convertido en la única forma de actuar.

El tiempo que pueda posponerse la evaluación económica y la rapidez con que puedan avanzar las reformas incrementales dependen de una serie de factores impredecibles. Si los líderes octogenarios de línea dura mueren antes que Deng es posible que puedan resurgir voces más reformistas. Si el daño ocasionado por las inundaciones no perjudica demasiado las cosechas de cereales de 1991, si pueden solucionarse las cadenas de deuda de las empresas estatales y si se puede mejorar el estado del sistema financiero y de crédito, si Estados Unidos no revoca el estatus comercial de nación menos favorecida de China, si la demanda interna no se expande de modo tan rápido que desencadene otra ola de inflación, entonces es posible que las cosas sigan funcionando durante algún tiempo. Sin embargo el momento de la evaluación tendrá que llegar, pues el dualismo restringe severamente las posibilidades de crecimiento en la China rural y condena a los campesinos a oportunidades de segunda clase, al tiempo que condona el desperdicio y la ineficiencia en el sector urbano.

La resolución de este dilema no depende de una política en particular, ni de la introducción de elecciones, ni de una medida o suceso específico. La compleja maraña de intereses políticos y económicos y remedios *ad hoc* rápidos que abordan los síntomas pero no las causas, ha resultado en un nudo gordiano. Desentrañarlo requerirá inteligencia, determinación y claridad sobre los aspectos que deben cambiar fundamentalmente. Si no se comienza a desenredar pronto al nudo, cuando se produzca la próxima gran crisis económica es posible que la única alternativa factible sea la solución alejandrina.